



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA LABORAL

Medellín, mayo 28 de 2023

Radicado: 05001 31 05-019-2017-00457-01
Demandante: LUIS IGNACIO ZAPATA TABARES
Demandado: MINEROS SA, COLPENSIONES, AFP COLFONDOS, AFP
PORVENIR Y LA NACIÓN – OBP DEL MINISTERIO DE
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y SEGUROS DE VIDA
ALFA SA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA
Tema: INEFICACIA DE TRASLADO ENTRE REGÍMENES y
CÁLCULO ACTUARIAL

La Sala Sexta de decisión, presidida por el magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN, e integrada por las magistradas MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA Y ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, procede a emitir sentencia dentro del proceso ordinario laboral de la referencia; decisión que se emite en forma escrita atendiendo a las disposiciones del artículo 13 de la ley 2213 de 2022.

Acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado, se procede a emitir la presente decisión.

ANTECEDENTES

Señaló el demandante que nació el 28 de agosto de 1952; que laboró para la empresa Mineros SA entre el 18 de abril de 1975 al 9 de febrero de 1981 y luego entre el 20 de agosto de 1983 al 22 de febrero de 2012, sin embargo este empleador previo al año 1983 no realizó aportes al sistema pensional, por lo que aspira se realice el pago de tales contribuciones a Colpensiones para luego proceder al reajuste de la pensión de vejez bajo la égida del Decreto 758 de 1990 como beneficiario del régimen de transición pensional.

Pone de presente que en septiembre de 1999 migró al RAIS a través de la AFP Colfondos y en julio de 2001 se trasladó a la AFP Porvenir entidad que en el año 2014 reconoció la pensión de vejez en la modalidad de retiro programado y luego con la contratación de renta vitalicia a través de la aseguradora Alfa SA. Así pues, para efectos de acceder al reajuste pensional acude a diferentes opciones, ora declarar que nunca perdió el régimen de transición en tanto lo adquirió al contar con más de 15 años de servicio a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, ora por ineficacia de la afiliación al RAIS, ora por inexistencia del traslado al RAIS.

En respuesta a la acción Colpensiones expresó ser ajena a todos los reclamos del actor al desconocer la existencia de la predicada relación laboral y no haber interferido en el cambio de régimen ni el reconocimiento pensional

La sociedad Mineros SA aceptó la existencia de la relación laboral con el actor indicando que previo al 1° de diciembre de 1983 no había cobertura del ICSS por tanto no podían realizarse las cotizaciones, las que se realizaron a partir del mes de enero de 1984.

Mientras que las accionada Colfondos y Porvenir expresaron que el traslado entre regímenes se configuró como un acto de voluntad exento de vicios

A la par Porvenir elevó demanda de reconvención contra el demandante para que, en el evento que se declare una ineficacia del traslado al RAIS y del reconocimiento pensional, este reintegre las sumas pagadas como mesadas en la modalidad de retiro programado. También solicitó la integración del contradictorio con la oficina de Bonos pensionales de la Nación y Seguros de Vida Alfa SA atendiendo al reconocimiento pensional del señor Zapata Tabares. Entidades que contestaron la demanda mostrando total oposición a las súplicas, además la aseguradora Vida Alfa SA presentó demanda de reconvención contra el demandante para obtener la devolución de los recursos ya pagados como pensión de vejez en la modalidad de renta vitalicia.

En sentencia de primera instancia tras declarar la existencia de una relación laboral del señor Zapata Tabares con Mineros SA en los extremos aceptados por las partes, condenó a este empleador al pago del cálculo actuarial por el tiempo corrido entre el 18 de abril de 1975 al 9 de febrero de 1981 y entre el 20 de agosto de 1983 al 4 de febrero de 1984, dineros que remitirá a la AFP Porvenir y esta entidad a la vez los pagará como reajuste a la prima del contrato de renta vitalicia la compañía Seguros de Vida Alfa SA, entidad que deberá reajustar la pensión de vejez que disfruta el demandante con efectos prospectivos desde la cancelación del reajuste a la prima, sin lugar a retroactivo pensional.

En cuanto a la pretensión de declaratoria de ineficacia de la migración al RAIS expuso que la misma no es posible dada la calidad de pensionado lo que comporta un estatus jurídico que no es modificable, esto de cara al criterio de la Sala de Casación Laboral de la CSJ, absolución que tiene efectos respecto a la pretensión de reajuste pensional bajo la égida del Decreto 758 de 1990 y de contera hace inanes las súplicas expuestas en las demandas de reconvención

Inconforme con la decisión fue **recurrida por la activa** quien disiente de la imposibilidad de declarar la ineficacia por la condición de pensionado tachando de errada la interpretación que hace el fallador de la jurisprudencia de la CSJ teniendo en cuenta que al momento en que se elevó la demanda existía un criterio diferente de decisión. Sin que exista normativa que prohíba al pensionado alegar las consecuencias de la falta de información para obtener la declaratoria de ineficacia además que el actor está sufriendo un perjuicio, sin que se hubiera demostrado el daño que generaría la declaratoria de ineficacia.

Así las cosas, insiste en que el pago del cálculo actuarial debe hacerse a Colpensiones entidad que habría de reconocer la pensión de vejez bajo el régimen de transición con pago del retroactivo pensional con intereses, indexación y perjuicios como lo establece la actual jurisprudencia.

Por su parte, la sociedad **Mineros SA** expuso que no es necesario el pago del cálculo actuarial no solo porque no existía obligación de realizar cotizaciones en ausencia de cobertura en la región de prestación del servicio, pero además porque tal erogación no generará un beneficio o por lo menos este no se probó, condición que establece la sentencia T 281 de 2020

De forma subsidiaria indica que en caso de confirmarse la decisión deben seguirse las reglas de la sentencia mencionada (T 281 de 2020) esto es habilitar solo los tiempos necesarios para obtener el beneficio pensional, que el trabajador pague su porción, sin que haya lugar a la imposición de intereses de mora teniendo en cuenta que no se trata de una situación de omisión sino de imposibilidad de realizar los aportes (Decreto 1572 de 1973) al igual que se exonere de la condena en costas.

ALEGATOS

Concedido el término que establece el artículo 13 de la ley 1322 de 2022 Colpensiones presentó escrito indicando que el traslado de régimen del actor fue válido y ceñido de los requisitos exigidos para la época, sin que pueda predicarse el regreso del señor Zapata Tabares al RPM en tanto se incurre en la limitante que establece el artículo 3° de la Ley 797 de 2003.

Por su parte las accionadas AFP Porvenir y la Seguros De Vida Alfa S.A expusieron que debe confirmarse la decisión del fallador de instancia que consistió en la obligación de pago del cálculo actuarial a cargo de la empresa Mineros SA, dineros que serán trasladados a la AFP Porvenir y a su vez trasladados a la aseguradora para efectos del reajuste de la prestación económica de pensión de vejez, sin que haya lugar a la declaratoria de ineficacia de la afiliación al RAIS como tampoco de la pensión de vejez dada la posición jurisprudencial de la CSJ que impide tal condena cuando se ha configurado el estatus jurídico de pensionado.

CONSIDERACIONES

Atendiendo a los elementos de prueba adosados al trámite y los aspectos no controvertidos en este caso se encuentran por fuera de discusión que **1)** Luis Ignacio Zapata Tabares nació el 28 de agosto de 1952 (página 43- expediente escaneado); **2)** Que prestó servicios para la empresa Mineros de Antioquia SA entre el 18 de abril de 1975 al 9 de febrero de 1981 y entre el 20 de agosto de 1983 al 22 de febrero de 2012 así lo certifica la empresa accionada (pág. 56); **3)** que se afilió al RPM a través del extinto ISS realizando cotizaciones entre el 5 de enero de 1984 al 31 de octubre de 1999 (pág. 61/62, 240/248 y 285/286) **4)** Que se trasladó a la AFP Colfondos siendo efectiva a partir del mes de diciembre de 1999 (pág. 57), migrando a la AFP Horizonte (ahora Porvenir) con la suscripción del formulario el 30 de julio de 2001 (pág. 58); **5)** que el 25 de febrero de 2011 solicitó al ISS el reingreso al RPM (pág. 59) la que reiteró el 14 de febrero de 2017 (pág. 103/110), **6)** que el señor Zapata Tabares el 21 de febrero de 2014 solicitó a la AFP Porvenir el reconocimiento de la pensión de vejez (pág. 481/482), cuya concesión lo fue en la modalidad de retiro programado en carta del 21 de agosto de 2014, fijando la mesada para el año 2014 en \$1'231.564 un pago de retroactivo de \$2'463.128 a ingresar en nómina de pensionados en el mes de septiembre de 2014 (pág. 84/86 y 91) y luego cambiada a la modalidad de renta vitalicia a través de la compañía Seguros de Vida Alfa SA a partir del mes de julio de 2017 (pág. 611/615)

También se acreditó que mediante resoluciones N° 12663 de junio 25 de 2014 y N° 12935 de agosto 26 de 2014 se emitieron los cupones de financiamiento de la prestación del actor (pág. 489/500) generando un bono pensional que representa 5642 días ó 806 semanas de cotización al RPM con destino a la AFP Porvenir por valor de \$178'508.000 (pág. 67/68)

En ese orden de ideas, restringido a los reparos expuestos por los apelantes, corresponde a esta corporación determinar la procedencia del pago del cálculo actuarial por el tiempo de servicio en que el ex empleador Mineros SA no realizó

cotizaciones al sistema pensional, al igual que la procedencia de la declaratoria de ineficacia y/o de la migración de régimen pensional, aspecto este que por cuestiones metodológicas se revisará de forma previa a la posibilidad de emisión del cálculo actuarial

DECLARATORIA DE INEFICACIA

Conforme a las anteriores premisas, se advierte la controversia en esta instancia gira en torno de establecer si es posible acceder a la solicitud de ineficacia del traslado del RPMPD, efectuado por el accionante cuando ya se encuentra disfrutando de la pensión de vejez reconocida dentro del Régimen de Ahorro Individual.

Al respecto, es de anotar que este despacho era del criterio que la ineficacia podía declararse con independencia de si el solicitante se encontraba o no pensionado en tanto lo que se ponderaba en sede judicial era el cumplimiento de los requisitos del acto de traslado de régimen, más allá de los actos posteriores o incluso las utilidades que buscase la parte, en aras de verificar la satisfacción plena y total del derecho pensional.

No obstante el órgano de cierre de esta jurisdicción dejó claro que cuando el solicitante se halla pensionado en el Régimen de Ahorro Individual, la evaluación y determinación de la ineficacia trasciende a algunas situaciones jurídicas que se encuentran consolidadas jurídicamente y que por tanto deben ser respetadas, so pena de afectarse con ello derechos de terceros que han intervenido en el proceso pensional, con graves consecuencias que eventualmente repercutirían en el sistema de seguridad social.

Es así que en sentencia SL 373 del 2021 el alto tribunal ante el interrogante de si es posible acceder a la ineficacia de traslado de quien ya se encuentra pensionado, expuso:

“Para la Corte la respuesta es negativa, puesto que si bien esta Sala ha sostenido que por regla general cuando se declara la ineficacia de la afiliación

es posible volver al mismo estado en que las cosas se hallarían de no haber existido el acto de traslado (vuelta al statu quo ante) 1, lo cierto es que la calidad de pensionado es una situación jurídica consolidada, un hecho consumado, un estatus jurídico, que no es razonable revertir o retrotraer, como ocurre en este caso. No se puede borrar la calidad de pensionado sin más, porque ello daría lugar a disfuncionalidades que afectaría a múltiples personas, entidades, actos, relaciones jurídicas, y por tanto derechos, obligaciones e intereses de terceros y del sistema en su conjunto. Basta con relevar algunas situaciones:

Desde el punto de vista de los bonos pensionales, puede ocurrir que se haya pagado el cupón principal por el emisor y las cuotas partes por los contribuyentes y, además, que dicho capital esté deteriorado en razón del pago de las mesadas pensionales. En tal caso, habría que revertir esas operaciones. Sin embargo, ello no parece factible porque el capital habría perdido su integridad y, por consiguiente, podría resultar afectada La Nación y/o las entidades oficiales contribuyentes al tratarse de títulos de deuda pública.

Desde el ángulo de las modalidades pensionales, en la actualidad las entidades ofrecen un diverso portafolio de alternativas pensionales. Algunas son retiro programado, 1 SL1688-2019, SL3464-2019 Radicación n.º 84475 SCLAJPT-10 V.00 16 renta vitalicia inmediata, retiro programado con renta vitalicia diferida, renta temporal cierta con renta vitalicia de diferimiento cierto, renta temporal con renta vitalicia diferida, renta temporal variable con renta vitalicia inmediata.

Cada modalidad tiene sus propias particularidades. Por ejemplo, en algunas el afiliado puede pensionarse sin que importe la edad o puede contratar dos servicios financieros que le permitan acceder a una renta temporal cierta y a una renta vitalicia diferida. En otras, el dinero de la cuenta de ahorro individual es puesto en el mercado y genera rendimientos administrados por la AFP. Incluso se puede contratar simultáneamente los servicios con la AFP y con una aseguradora en aras de mejorar las condiciones de la pensión. Es de destacar que en la mayoría de opciones pensionales intervienen en la administración y gestión del riesgo financiero, compañías aseguradoras que garantizan que el pensionado reciba la prestación por el monto acordado.

Por lo tanto, no se trata solo de revertir el acto de traslado y el reconocimiento de la pensión, sino todas las operaciones, actos y contratos con el afiliado, aseguradoras, AFP, entidades oficiales e inversionistas, según sea la modalidad pensional elegida.

Si se trata de una garantía de pensión mínima, volver las cosas a su estado anterior, implicaría dejar sin piso los actos administrativos que mediaron en el reconocimiento de Radicación n.º 84475 SCLAJPT-10 V.00 17 la garantía. Como La Nación asume el pago de dicha prerrogativa, se requería la intervención de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y

Crédito Público para que defienda los intereses del Estado que se verían afectados por la ineficacia del traslado de una persona que ya tiene el status de pensionado. Esto a su vez se encuentra ligado a lo dicho acerca de los bonos pensionales, pues la garantía se concede una vez esté definido el valor de la cuenta de ahorro individual más el bono.

Ni que decir cuando el capital se ha desfinanciado, especialmente cuando el afiliado decide pensionarse anticipadamente, o de aquellos casos en que ha optado por los excedentes de libre disponibilidad (art. 85 de la Ley 100 de 1993), en virtud de los cuales recibe la devolución de una parte de su capital ahorrado. En esta hipótesis, los recursos, ya desgastados, inevitablemente generarían un déficit financiero en el régimen de prima media con prestación definida, en detrimento de los intereses generales de los colombianos.

Posición que ha sido reiterada en providencias tales como SL 2198 de 2022, SL 1798 de 2022, SL 2042 de 2022, SL 3204 de 2022 entre otras.

Así las cosas la condición de pensionado que ostenta el señor Zapata Tabares impide acceder a la declaratoria de ineficacia del traslado entre regímenes, sin que para el actor se hubiere consolidado un derecho o menos una expectativa de tener una sentencia favorable atendiendo al previo criterio del órgano de unificación de la jurisprudencia no solo porque la interpretación desueta no tiene efectos prospectivos, pero además porque la Corte fue clara al indicar que cambió su posición y asume un subcriterio de decisión en tratándose de ineficacia de todos los ciudadanos que ostenta la calidad de pensionado, lo que revela que no se existe un tratamiento discriminatorio toda vez que existen elementos diferenciadores que generan un análisis bajo categorías disímiles con sus propias consecuencias.

Ahora, respecto a las réplicas de aplicación de la sentencia SU 062 de 2010 basta con indicar que los presupuestos fácticos de tal análisis distan de los del actor en tanto aquella providencia tuvo como problema jurídico la aplicación del artículo 2° de la Ley 797 de 2003 para el **afiliado** que adquirió el régimen de transición por contar con más de 15 años de servicios y/o cotizaciones a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 calidad de afiliado que no ostenta el actor, planteamiento que bien pudo haber realizado en su debido momento como lo hizo con la reclamación del 25 de febrero de 2011 (pág 59) bajo la cual no planteó una discusión en sede judicial y por el contrario optó por el acceso a la pensión, la que solicitó el 21 de febrero de 2014

(pág 481/482), y ha disfrutado desde tal año, por tanto su reclamo no encaja en las premisas de decisión del precedente jurisprudencial que señala.

De igual forma, desacertado es la afirmación de la recurrente al indicar que la declaratoria de ineficacia no generaría ningún trauma al sistema, pues basta con indicar que con ocasión del reconocimiento pensional se expidió y pagó el bono pensional por más de \$170'000.000 recursos que ingresaron a la CIA, con los que se financió la pensión bajo la modalidad de retiro programado entre los años 2014 a 2017 y que en julio de 2017 se trasladaron a la asegurado Alfa SA como prima única para el financiamiento de la renta vitalicia (pág 611), lo que revela con suficiencia que los recursos han tenido diferentes destinaciones, no solo entre las entidades del sistema pensional, pero además han generado la pensión por más de 8 años, por tanto retrotraer tales efectos genera consecuencias para el sistema pensional y el accionante.

En adición, pese a que la activa dentro del recurso de apelación aludió a una “condena por perjuicios en los términos de la jurisprudencia actual” basta indicar que tal aspecto escapa a la órbita de decisión de este trámite, al ser una pretensión que no fue planteada ni probada, frente a la cual no se permitió el derecho de defensa, sin que sea el recurso de apelación el espacio para complementar las postulaciones de la demanda.

Así las cosas, sin que sea posible predicar la declaratoria de nulidad y/o eficacia del traslado entre regímenes imprósperas son las súplicas que pendían de tal declaratoria, esto es el reajuste pensional bajo la égida del Decreto 758 de 1990 y todas las condenas accesorias, conclusión expuesta por el A quo

CÁLCULO ACTUARIAL

Pues bien, en lo que tiene que ver con el pago de título pensional por parte de los empleadores en la época en que no existía cobertura, ha sido un tema con diferentes interpretaciones por parte de la jurisprudencia de la Sala Casación de la Corte Suprema de Justicia, en tanto la corporación consideraba que la falta de cobertura

del extinto ISS en algunas zonas del país eximía a los empleadores de las cotizaciones y/o afiliaciones que no se realizaron con anterioridad a la vigencia de la ley 100 de 1993; empero tal postura se modificó como puede observarse en sentencias de radicado N° 32922, de 22 de julio de 2009, N° 38225 del 13 de marzo de 2012 y de forma diáfana a partir de la sentencia SL 9856 de 2014 exponiendo que pese a la falta de cobertura o llamamiento a inscripción por parte de la entidad de seguridad social, en atención al artículo 76 de la ley 90 de 1946 al empleador se le exigía realizar el **aprovisionamiento** de capital necesario para garantizar el acceso al derecho pensional de sus trabajadores, ya que estaba bajo su responsabilidad el cubrimiento de las contingencias de IVM y por tanto tal tiempo debe tener incidencia en la conformación de las prestaciones, no puede ser obviado, como tampoco puede el trabajador ver frustrados los derechos pensionales (al respecto la sentencia SL 4292 de 2022, que a la vez se remite a consideraciones de previas decisiones entre ellas la CSJ SL 2879 de 2020, así:

“Ahora, la jurisprudencia de la Sala también ha establecido que en estos eventos el cálculo incluye todo el período laborado por el empleado porque mientras el ISS no subrogara al empleador en sus obligaciones, este tenía la responsabilidad total respecto al riesgo pensional del trabajador. Además, el empleado no puede asumir las consecuencias negativas de la falta de previsión del ordenamiento legal en estos casos ni mucho menos ver afectados sus derechos laborales, en especial, cuando lo que está de por medio es la validación de unos tiempos para el reconocimiento y goce de la pensión de vejez (CSJ SL2879-2020)”

Conclusión que se fortifica en las premisas del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 que para efectos de acopiar la densidad de cotización necesaria para acceder a las pensión de vejez, permite computar *“El tiempo de servicio como trabajadores vinculados con empleadores que antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 tenían a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, siempre y cuando la vinculación laboral se encontrara vigente o se haya iniciado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993”*

Adicionalmente, la Sala Laboral de la H. Corte Suprema, ha considerado que la norma a regular los efectos de la falta de afiliación o la mora en los aportes, **es la vigente al momento de la causación de la prestación reclamada**, ello con arreglo

a principios de la seguridad social, tales como universalidad e integralidad. (sentencia SL 14388 DE 2015) y que es la norma vigente al momento en que se suceden los supuestos fácticos contemplados en la norma, la que debe presidir la solución de la controversia» (CSJ SL1419-2018), debido al carácter retrospectivo que tienen las disposiciones de la seguridad social.

A la par, la Corte Constitucional en sus providencias ha variado su posición respecto a la posibilidad de habilitar como semanas cotizadas el tiempo trabajado antes que surgiera la obligación para los empleadores; donde en un primer momento se estableció que tal situación no debía asumirse como una omisión sino que correspondía a las reglas pensionales de la época (fallos anteriores al año 2012) moviéndose la jurisprudencia en un panorama más proteccionista, estableciendo que esta falta de cobertura no desdibujaba el deber de aprovisionamiento para reconocer la pensión de vejez (entre otras las sentencias T-492 de 2013, T-681 de 2013, T-937 de 2013 y T-435 de 2014), reconociendo que no podía privarse al ciudadano del acceso al derecho pensional, incluso aquellos cuya relación laboral hubiere culminado antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 (sentencia T 665 de 2015)

Línea de decisión que fue relatada por la sentencia T 399 de 2021 donde se enfatiza que las obligaciones pensionales no surgieron con la expedición de la Ley 100 de 1993, ya que de forma previa estaba asignado tal deber al empleador de donde se deriva el deber de aprovisionamiento.

Ahora bien, destaca la corporación que la Corte Constitucional en sentencia T 281 de 2020 estableció unas reglas para la satisfacción del cálculo actuarial a saber: lo restringe a los tiempos que sean necesarios para causar una prestación, liquidados con base en el salario mínimo de la época y con el deber del trabajador de concurrir en tal pago, empero tal interpretación no representa el criterio mayoritario de guardiana de la carta suprema, así se evidencia en el salvamento de voto de tal decisión donde se referencian las escasas providencias que acogen tal planteamiento, además que permite identificar que aquel incurre en una contradicción, toda vez que pese a reconocer que sobre el trabajador no deben

recaer las consecuencias adversas de las omisiones o incumplimientos pensionales, genera tal efecto en tanto lo hace concurrir en el deber de aprovisionamiento.

Criterio que comparte la Sala de Casación Laboral al precisar que el valor del cálculo actuarial que el empleador debe trasladar a la entidad de seguridad social, está exclusivamente a su cargo, sin contribución alguna para el trabajador (CSJ SL 2584-2020, SL 4292 de 2022 entre otras)

Así las cosas, verificadas las posturas de las altas corporaciones llevan a esta sala de decisión a establecer que con la Ley 100 de 1993 los tiempos de servicios que las personas trabajaron con anterioridad a su vigencia sin cotización a alguna entidad de previsión social independientemente de su causa -omisión del empleador o falta de cobertura- deben ser respaldados o validados a través de un cálculo actuarial a cargo del empleador, trasladado al respectivo ente de seguridad social para financiar las eventuales prestaciones pensionales, prestación que, desde luego, deberá incluir en su totalidad el tiempo servido por la persona, obligación en la que no debe concurrir financieramente el trabajador.

Con estas premisas se descende al **caso concreto** donde quedó plenamente establecido que desde el 18 de abril de 1975 se dio inicio a una relación laboral de Luis Ignacio Zapata Tabares en favor de Mineros SA, empresa que realizó aportes al sistema de seguridad social en pensiones a través del extinto ISS a partir del 5° de enero de 1984, no así los previos ello por falta de cobertura del ICSS en la región del Bagre – Antioquia, lugar de prestación del servicio.

Así las cosas y dado que el tiempo laborado y no cotizado tiene incidencia en la pensión que disfruta el actor como se expondrá a continuación, patente es la obligación del empleador Mineros SA tramitar ante la AFP Porvenir la liquidación y pago del **cálculo actuarial por el tiempo corrido entre el 18/04/1975 al 09/02/1981 y entre el 20/08/1983 al 04/01/1984**, liquidados bajo la metodología que se tiene establecida para los cálculos actuariales, que computa variables de actualización de

los recursos no como sanción sino para que estos guarden el poder adquisitivo y eventual rentabilidad de haberse aportado en los periodos correspondientes.

Pago que sí tendrá una incidencia positiva en la prestación que disfruta el demandante quien ostenta una pensión en el RAIS bajo la modalidad de renta vitalicia inmediata (pág. 611 expediente digital) la que permite el acceso a una mesada uniforme en términos de poder adquisitivo (ajustada conforme a la variación del IPC) pero cuyo monto inicial se obtiene en razón al capital ahorrado en la cuenta individual y sus intereses (artículo 80 Ley 100 de 1993), lo que se traduce en que a mayor capital mayor pensión, condición que es aceptada por la aseguradora que asume tal pago, que no presentó oposición a la condena e incluso la avaló en los alegatos en esta instancia y por tanto excede el ámbito de revisión en esta instancia.

Resta por indicar que se mantiene la condena en costas de primera instancia sin que se exonere a Mineros SA, al ser conocedora de la carga pensional que asume por sus ex trabajadores y pretende evadirla presentando oposición a la demanda, condición que genera la imposición de las costas (artículo 365 CGP). Sin costas en esta instancia toda vez que las oposiciones de las partes no prosperaron.

En mérito de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la república de Colombia y por autoridad de la ley, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL, **CONFIRMA DE FORMA TOTAL** la providencia recurrida.

Costas como estableció la A quo. sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica a las partes por Edicto. Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen.

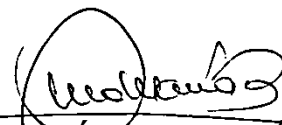
Los Magistrados,



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la siguiente providencia:

Radicado: 05001 31 05-019-2017-00457-01
Demandante: LUIS IGNACIO ZAPATA TABARES
Demandado: MINEROS SA, COLPENSIONES, AFP COLFONDOS, AFP PORVENIR Y LA NACIÓN – OBP DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y SEGUROS DE VIDA ALFA SA
Decisión: CONFIRMA
Magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado 10 de abril de 2023 a las 8:00 am, desfijado en el mismo día a las 5:00 Pm y se publica en la página web institucional de la Rama judicial por el término de 1 día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 idíbem. La notificación se entenderá surtida al término de fijación del Edicto

RUBEN DARIO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO